



JUZGADO VEINTE CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

Bogotá D.C., Veintidós (22) de Mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024).

Ref.: 2024-00118

Se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponde dentro del presente trámite de acción de tutela que promovió **YAIR LEANDRO RODRIGUEZ GIRALDO** en contra del **BANCO GNB SURAMERIS** y la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**.

ANTECEDENTES

1. En ejercicio de la acción de tutela el prenombrado demandante, que actuó por intermedio de apoderada especialmente habilitada, reclamó protección a sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a la vida digna y petición, para que, en consecuencia, se ordene a las accionadas *“se haga efectiva efectiva la póliza de incapacidad total y permanente por invalidez con la cual estaba asegurado el crédito, con el fin de cubrir el valor insoluto de la deuda y de exonerarlo de esta obligación a partir del 7 de noviembre del año 2019 donde fue calificado por la Junta Médica del Ejército Nacional con pérdida de capacidad laboral del 59.59%.”*

2. Como sustento fáctico de su petición, relató, en síntesis, los hechos que así se compendian:

2.1. Que para febrero de dos mil diecinueve (2019), firmó la declaración de asegurabilidad contenida en el formulario de la solicitud individual de seguro, requerida por el Banco GNB Sudameris para el trámite del crédito solicitado por compra de Cartera del Banco Popular.

2.2. Que desde mayo de dos mil diecinueve (2019) y hasta la fecha, ha realizado por medio de la modalidad de libranza el pago del citado crédito por la suma de \$ 1´979.803, valor en que se encuentra incluido el seguro de riesgos de Muerte o Incapacidad Total y Permanente.

2.3. Que para el siete (7) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), la Junta Médica de Sanidad del Ejército Nacional, lo calificó con una disminución de la capacidad laboral en del 59.59%.

2.4. Que el pasado veintidós (22) de marzo, realizó la reclamación del pago del seguro de riesgo de muerte o incapacidad total o permanente de acuerdo a la calificación de la Junta Médica de Sanidad del Ejército Nacional, misma que fue resulta de manera negativa indicando que: *“En este caso, es preciso señalar que el asegurado firmó la declaración de asegurabilidad contenida en el formulario de la solicitud individual de seguro, requerida por el Banco GNB Sudameris para el trámite del crédito solicitado, el 15 de febrero de 2019, y en ella manifestó no padecer ni haber padecido ninguna enfermedad.”*

2.5. Que a su vez, elevó un derecho de petición con el fin de aclarar los descuentos realizados, valor del crédito, entre otra información para conocer el estado actual del crédito, sin que a la presentación de la presente acción se haya recibido respuesta alguna a sus interrogantes.

3. La acción de tutela fue admitida mediante auto calendado ocho (8) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) y luego de haberse vinculado en debida forma a la interesada, se encuentra la actuación en punto de dictar la decisión con la que se cierra la instancia.

LA RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS

1. La **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, se opuso a la pretensión de amparo aduciendo que la supuesta vulneración ocurrió el día 6 de marzo de 2020 fecha en la que se objetó formalmente su solicitud de indemnización y la radicación del escrito de tutela se presentó en el mes de mayo del año 2024, es decir, que entre la supuesta afectación a los derechos fundamentales que el accionante invoca y la presentación de la acción de tutela transcurrieron más de cuatro (4) años, periodo de tiempo que trasgrede el principio constitucional de inmediatez.

2. El **BANCO GNB SUDAMERIS S.A.**, señaló que no tuvo conocimiento del derecho de petición enviado por la apoderada del accionante de fecha 22 de marzo de 2024, por cuanto fue remitido a través del buzón respuesta_pgrs@gnbsudameris.com.co, el cual es de uso

exclusivo para el envío de información sus nuestros clientes, sin que presente función de recepción de solicitudes o reclamo. No obstante, se dio respuesta a dicha solicitud de manera completa, clara y de fondo mediante comunicación, Anexo 1, la cual fue remitida a través del correo electrónico informado por el accionante dianamarcelaibarra1@hotmail.com.

CONSIDERACIONES

1. Sabido es que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional fue concebida como mecanismo judicial exclusivamente encaminado a la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, cuando quiera que por acción u omisión de las autoridades públicas, e incluso de los particulares en las específicas hipótesis contempladas en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, resulten amenazados o vulnerados, lo que justifica la intervención del juez constitucional en aras de conjurar la situación anómala que desquicia la primacía de tales prerrogativas en el derecho interno.

2. Desde esa óptica, en línea de principio, si el acusado de infringir prerrogativas de naturaleza esencial es un sujeto de derecho privado, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-655 de 2011 ha reiterado que la procedencia del instrumento puede abrirse camino cuando el demandado *“(i) tenga a su cargo la prestación de un servicio público; (ii) (...) con su actuar afecte gravemente el interés colectivo o; (iii) en casos en los que el accionante se encuentre en situación de subordinación e indefensión con respecto al agresor”*.

3. Igualmente, valga destacarlo desde el pórtico, en lo que, a las entidades asegurados refiere, la Corte ha señalado que también resulta procedente la acción de tutela cuando están inmersos derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Así: *“si bien los conflictos generados entre estas y los usuarios son de carácter contractual, y por ende la jurisdicción competente es la ordinaria, la acción de tutela puede ser la vía idónea para resolverlos si la disputa presentada vulnera o amenaza derechos fundamentales de los clientes.”*¹

4. En el asunto materia de juzgamiento, es palpable *in radice* que la intención del actor rebasa la finalidad de la figura en comento, pues lo que se pretende sumariamente es que “se haga efectiva efectiva la póliza de incapacidad total y permanente por invalidez”, y lo cierto es que puede acudir a los mecanismos de defensa ordinarios para exponer tal pretensión, máxime cuando, el expediente no contiene evidencia demostrativa del compromiso alguno a los derechos fundamentales o la inminencia de la configuración de un perjuicio irremediable que justifique decisión en contrario, de lo que refulge la aplicación de la causal de improcedencia consagrada en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991. Aunando a lo anterior, una de las características de mayor relevancia de las acciones de este linaje es precisamente su *inmediatez*, es decir, aunque la acción de tutela no está sometida a un término de caducidad, la jurisprudencia nacional ha decantado la necesidad de verificar una conducta proactiva razonable en cabeza del presunto afectado en sus

¹ Corte Constitucional. Sentencia T-309A de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

derechos fundamentales, traducida en que debe existir cierta proporcionalidad temporal a la hora de solicitar la protección ante la jurisdicción constitucional, analizada desde el momento en que se consolida la vulneración o amenaza de aquellos, por lo que, las pretensiones del actor no pueden tener eco en este escenario residual, dado que, no es claro por qué si desde el año dos mil diecinueve (2019) fue calificado con un porcentaje de invalidez del 59.59%, no acudió con anterioridad ante la convocada a solicitar se hiciera efectivo el seguro que ahora acá se reclama, pues si en realidad su capacidad económica se veía disminuida, de ser así, era de esperarse una mayor celeridad en el ejercicio de la acción la constitucional.

5. En este punto, se ocupará el despacho de estudiar si están dados los presupuestos para amparar el derecho fundamental de petición que se acusó vulnerado, y vislumbrándose de entrada que el derecho de petición objeto de inconformidad de la demandante está dirigido contra una entidad privada que presta el servicio público bancario, con el advenimiento de la Ley 1755 de 2015, que reguló íntegramente el derecho fundamental de petición, se ratificó en el artículo 33 de esa normatividad, que las empresas de del sistema financiero y bursátil, son destinatarias de la facultad en comento.

6. Sentado lo anterior, es prudente memorar que el derecho de petición hace parte de aquellos catalogados por expreso mandato del constituyente como de aquellos de naturaleza fundamental, y en esencia, reconoce la necesidad del peticionario de contar con una respuesta que: *“(i) debe ser oportuna, es decir,*

debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Sin embargo, la respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita” como así se ha explicado de antaño, en especial, en la sentencia T- 204 de 2022.

7. Ahora bien, ya en el decurso de la acción de tutela, la demandada dio contestación a la petición genitiva de la queja constitucional, de la cual se envió respuesta mediante correo electrónico a la dirección dianamarcelaibarra1@hotmail.com, por lo que en este punto es importante señalar, que el derecho a obtener una respuesta no significa la favorabilidad a los intereses del peticionario, motivos suficientes para negar el amparo suplicado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veinte (20) Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá D.C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **RESUELVE:**

PRIMERO: **NEGAR** la acción de tutela descrita en el encabezamiento de esta providencia, dada la existencia de un hecho superado.

SEGUNDO: Notifíquese esta decisión a todos los intervinientes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada, remítase el encuadernamiento digital a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo proferido.

Notifíquese y cúmplase,

A handwritten signature in dark blue ink, consisting of a series of fluid, overlapping loops and strokes.

SALIM KARAM CAICEDO
Juez